

# Izquierda

LA MUERTE DE UN CAMPESINO ES EXCESIVA COMO PAGO AL P.S.T.

13- JUNIO -1980

POR MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA



Los del PST dijeron haber invadido tierras en 18 estados.

Pero, ¿es que acaso la muerte de Roberto Esperón, el joven dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores, tan querido por sus amigos y correligionarios, no es un dato brutalmente conmovedor, centralmente impactante, suficientemente esclarecedor de que ese partido se propone fines tan loables que conducen a perder la vida a un líder en el ejercicio de sus funciones? ¿No muestra eso sin lugar a dudas que el PST no está jugando?

La muerte de cuarenta, o cuatro, o uno, campesinos en Chiapas, en la culminación trágica de un conflicto agrario nos había llevado a la decisión de examinar en estas páginas, de nuevo, la naturaleza y la función del PST. Mientras llegaba el momento de la escritura del artículo correspondiente, la noticia de la

muerte de Esperón agregó un dato más a nuestras reflexiones. No puede pasarse por alto ese acontecimiento, por supuesto. Sin caer en sentimentalismos resulta imposible no ver con otra dimensión el quehacer político que, así sea por azar, tiene como uno de sus resultados el fallecimiento de un militante, pero dejando también aparte el sentimentalismo, como el PST debe alejarse de la terrible tentación de utilizar políticamente ese acontecimiento, el análisis del papel que juega el partido en las actuales circunstancias no debe perder su perfil.

Exige hacerlo un conjunto de circunstancias. Comenzando por una trivial, no es por casualidad que la muerte de Esperón haya sido notificada, además de por su propio partido, por el gobernador de Guerrero, ingeniero Rubén Figueroa. En esa entidad como en otras, el PST desempeñaba una tarea plena de ambigüedades, manifestadas en su colaboración con el gobierno en la política contraria a la universidad, en la aparente remodelación de la conducta de antiguos guerrilleros y en la tentativa de desplazar a los habitantes de las zonas altas. Bajo la cubierta de apoyo a la lucha de los acapulqueños pobres por una vivienda mejor, el PST auxilia las pretensiones gubernamentales para desalojar a los residentes más allá de la cota 225.

(Si se me permite aquí un parentésis personal, diré que la respuesta del gobernador Figueroa al planteamiento que formulé en estas páginas de *Siempre!* a propósito de ese conflicto en Acapulco no amerita contestación. Sus insultos resultan condecoraciones para mí, y la naturaleza de sus razonamientos, si se admite llamarlos así, lo pintan por entero. Nada más habría que reivindicar la legitimidad del trabajo periodístico que toma de otras fuentes informativas los materiales para su reflexión, siempre y cuando agregue, como en el caso de que hablamos, otros elementos y disponga los datos de una nueva manera. Por demás, pecador como soy, he cometido casi todos los errores posibles, excepto el de haber pertenecido al partido de Acción Nacional, como Figueroa afirma).

Pero no dejemos que el gobernador nos ditraiga. Hablamos del PST, y de su actuación en Chiapas. Cuando allí se produce

una, o varias muertes, las que sean, entonces tenemos que pensar en la irresponsabilidad de que con frecuencia da muestras la dirección del PST. En ocasiones, tal manera de conducirse en intrascendente y hasta risible. Tal, por ejemplo, las baladronadas de que se convertiría, el año pasado, en la segunda fuerza electoral del país, capaz de recoger seis millones de votos. El que no haya llegado ni siquiera a la décima parte de esa cifra señala que la correspondencia entre las ilusiones del PST y su dura realidad es escasa, como también lo muestran otras muchas actitudes. En febrero su liderazgo dio de plazo una semana a la Cámara de Diputados para que enjuiciara al gobernador de Jalisco, o de lo contrario los pesetistas adoptarían sus propias providencias. Ya estamos en junio y no ha pasado nada. Y cuando en abril tomó posesión de su cargo el nuevo secretario de la Reforma Agraria, los pesetistas invadieron tierras —en 18 estados dijeron ellos, con su habitual tendencia a la exageración; en cinco dijo el gobierno, con su habitual tendencia al disimulo— y juraron que en fecha determinada presentarían pruebas de que actuaban conforme a derecho. Por supuesto que antes de que el término se venciera lo pensaron mejor y, como muestra de buena voluntad decidieron salir de los predios que habían ocupado, lo que les relevó de la carga de la prueba, que se proponían presentar luego de una multitudinaria manifestación de las que han probado saber organizar.

La muerte de un solo campesino es excesiva si es el pago por la irresponsabilidad política con que actúa el PST. Lejos estamos, por supuesto, de culpar a ese partido de haber causado la violencia, pero es claro que, en cambio, no procedió del modo responsable que una acción agraria supone para evitar caer en las provocaciones. Este comportamiento es otra suerte de infantilismo de izquierda, propia de personas, generalmente "jóvenes de buenas familias", que actúan de manera irreflexiva en su afán de hacer la revolución mañana al mediodía, o de dirigentes cazurros que de ese modo pueden negociar con las autoridades locales márgenes de acción que los haga aparecer como eficaces gestores de intereses agrarios, o de plano obtener cuotas de protección para no causar problemas.

Luego de los confusos acontecimientos en Chiapas, un vocero de la CTM, a la que el PST se muestra muy adicto, pidió la cancelación del registro de ese partido. Por fortuna, el solicitante está descalificado, aunque no lo esté la organización a la que representa, para hacer tal demanda. De lo contrario, estaríamos frente a un riesgo grave. Siendo, como hemos insistido de manera reiterada, muy discutible la actuación del PST, no es posible convalidar la petición de que su registro quede invalidado, por los graves riesgos que ello implicaría.

Ya esta mal que la legislación electoral mexicana reclame una patente gubernamental para que los partidos puedan participar en elecciones. Ya está mal que en el texto de la ley se disponga la posibilidad de que un partido pierda esa patente. Estaría peor que se pusiera en práctica esa disposición porque, si bien el PST es un notorio apéndice gubernamental, y su extracción no suprimiría en realidad ninguna opción política, nadie podría reprochar al gobierno el que, en alguna circunstancia posterior arrebatará el registro a alguno de los partidos que realmente están en la oposición.

Lo que procede es, si alguien en el gobierno ha cobrado conciencia de que está jugando el papel de aprendiz de brujo, desatador de fuerzas que se vuelven incontrolables, dejar de alimentar con recursos gubernamentales (Sigue en la página 69)

